



La protesta se desarrolló ante la Consejería de Igualdad en Sevilla y, dada la desatención de la Junta, continuarán las movilizaciones J. C. RANGEL

La Junta desoye a los discapacitados intelectuales a los que no paga lo pactado

La Confederación que los agrupa se concentró ante Igualdad, pero **nadie les quiso recibir** — Calculan que la Consejería adeuda a este colectivo 16 millones

M. B. SEVILLA. No hay dinero para pagar a los discapacitados. Por eso ayer la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual se concentró ante la consejería de Igualdad y Bienestar Social para pedir que se cumplan los compromisos y se financien sus centros.

Los miembros de la junta directiva de esta asociación acudieron ayer a manifestarse a las puertas de la Consejería. Hubo adhesiones espontáneas de mucha gente que solidarizó con lo que el portavoz de esta formación, Francisco Alonso, consideró un «incumplimiento del compromiso» por parte de la Junta de Andalucía. Pero ningún miembro del departamento que dirige Micaela Navarro se puso en contacto con los manifestantes ni quisieron dar ninguna respuesta. La consejería calla.

Entretanto ayer el portavoz de esta asociación volvía a recordar que necesitan una regulación de los precios. La Junta de Andalucía otorga ahora mismo una subvención de 61,87 euros diarios y Feaps reclama aumentarlo a 71,15. La oferta final de la Administración autonómica fue subir siete euros y así se acordó aunque finalmen-

te no se ha pagado, como denuncia este colectivo.

Según indicó Francisco Alonso la movilización de ayer no es ningún pulso a la Junta de Andalucía sino «una medida de concienciación» porque, según insiste, necesitan esa medida de regulación de los precios para adecuarlos a la calidad de vida. Aunque no está evaluado el coste de esta ayuda, desde Feaps, estiman que costaría unos 16 millones de euros a las arcas públicas. Pero, según dicen, «la crisis ha provocado el recorte social». Por eso afirman que las personas con discapacidad «no pueden pagar la crisis».

Déficit

Por ello Feaps anunció ayer que continuarán con su calendario de movilizaciones «contra los recortes sociales» de la Junta de Andalucía después de comprobar que ésta «no tiene la intención de cumplir los compromisos económicos acordados en 2007» para la financiación de los centros de atención a personas con discapacidad intelectual. De hecho, según dicen, se encuentran con un déficit que les obliga a acudir a financiación atípicas como la solidaridad de los ciudadanos, municipios y entidades priva-

das «propias de otras épocas en las que imperaba el auxilio social o la beneficencia».

Según Feaps, desde la rueda de prensa que celebraron hace unos días, los acercamientos protagonizados por la Junta de Andalucía han sido «baldíos». Las 136 entidades, las 65.000 familias y los 4.500 profesionales que conforman el movimiento Feaps, «se sienten engañados por la Junta y abocados a una

desesperada lucha diaria para conseguir unos mínimos de calidad».

El próximo 10 de octubre la Junta Directiva de la organización se encerrará en cada una de las ocho delegaciones provinciales de Igualdad y Bienestar social; y el 25 de octubre se reunirá la Asamblea General extraordinaria del movimiento asociativo para decidir nuevas medidas.

Greenpeace critica la desidia de la Junta en el caso del hotel del Algarrobo

ABC

MADRID. La organización Greenpeace criticó ayer la «desidia» de la Junta respecto a la situación de ilegalidad del hotel de la promotora Azata del Sol en la playa de El Algarrobo, en Almería.

Tras la reunión mantenida ayer con la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, reiteró a la Junta su petición para que «cumpla su compromiso acelerando el derribo del hotel» y mantuvo que esta organización no renunciará «a seguir con las movilizaciones sociales hasta ver derribado el hotel».

Para la organización ecologista, la Junta «se ha excusado en el proceso judicial para no emprender actuaciones para derribar el hotel». Según explicaron, Castillo «afirma que el derribo del hotel depende de la Justicia y deja así de lado la sentencia del 5 de septiembre de 2008 que anulaba la licencia de construcción del hotel».

Greenpeace consideran que la actitud de la consejera «contradice las declaraciones de Chaves y de su antecesora, Fuensanta Coves, que, en 2007, insistió en que la demolición del inmueble dependía únicamente de que el Ministerio y la constructora llegasen a un acuerdo sobre el precio del suelo».



La crisis no afectará a las universidades

El presidente Chaves dijo ayer en Córdoba, en el acto de apertura del curso universitario, que «los efectos de la crisis no pondrán en riesgo el modelo de financiación de las universidades», ya que la Junta «va a seguir apostando por el gasto social». El curso comienza con 222.392 matriculados, un 1,12% menos que el anterior.